

22ª SESION ORDINARIA DEL 28 DE JULIO DE 1900

PRESIDENCIA DEL DOCTOR GÁLVEZ

SUMARIO: I. —Asuntos entrados.

- II.—Sanción de un proyecto de ley, en revisión, despachado por la Comisión de Negocios Constitucionales, acordando al ciudadano don Narciso M. Acuña permiso para aceptar el cargo de cónsul del Perú en el Paraguay.
- III.—Aprobación de un proyecto de ley, despachado por la Comisión de Negocios Constitucionales, acordando al ciudadano argentino don Domingo Macera el permiso que solicita para aceptar el cargo de cónsul del Paraguay en la ciudad del Rosario.
- IV.—Aprobación de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, despachado por la Comisión del Interior, autorizando á la Municipalidad de la Capital para erigir una estatua de don Juan de Garay en el Paseo Colón.
- V.—Aprobación de un proyecto de ley de la Comisión del Interior, concediendo á los señores Alfredo M. Méndez y C^a el derecho de construir y explotar una línea férrea, que arrancando del puerto Barranqueras (Resistencia), concluya en la margen del río Pilcomayo, con dirección general á Santa Cruz de Bolivia.

SEÑORES SENADORES En Buenos Aires, á los veintiocho días del mes de julio de mil novecientos, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente y los señores senadores al margen consignados, se abre la sesión, con inasistencia de los señores Díaz é Igarzábal con licencia, Mitre, Aparicio y Pérez con aviso, y Avellaneda, Barbeito, Barraza, Benegas, Córdoba, Mendoza, Morón y Pellegrini sin aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior, de 26 del corriente (21ª ordinaria),

se da cuenta de los

I

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

El Poder Ejecutivo remite los siguientes mensajes y proyectos de ley:

Buenos Aires, julio 26 de 1900.

Al honorable Congreso de la Nación:

El comercio marítimo, siempre creciente en el puerto de Buenos Aires, y la falta de construcciones para el almacenamiento de los artículos inflamables, han demostrado la urgencia de proceder á darle mayor ensanche y establecer las seguridades que reclama la Capital de la República, expuesta hoy á incendios que podieran llegar á ser verdaderas catástrofes.

Por estas razones y la de que en los últimos años fueron presentadas á ambas cámaras del honorable Congreso y al ministerio respectivo diversas proposiciones

completa del dock y depósitos, serán introducidas libres de derechos de aduana. El dock, los depósitos y accesorios, una vez construidos, serán libres de todo impuesto ó contribución.

Art. 13—El dock y los terrenos para los depósitos que se ganen al río, quedarán unidos al puerto de la Capital por una faja de terreno por la cual se comunicará el tráfico general y dará acceso á las vías férreas del puerto.

Art. 14—El Gobierno Nacional se obliga á no hacer concesión análoga á la presente durante el término de su duración; y cuando las necesidades del servicio lo requiriesen, el concesionario, á pedido del Poder Ejecutivo, extenderá los muelles en cantidad suficiente, previa aprobación de los planos por el Poder Ejecutivo.

Art. 15—A los seis meses de otorgada esta concesión se presentarán los planos, presupuestos, detalles y especificaciones definitivas, y seis meses después de aprobados éstos darán comienzo las obras. La obra quedará terminada dentro de los dos años de aprobados los planos, y por cada mes de demora abonará el concesionario \$ oro 20.000 (veinte mil pesos oro sellado).

Art. 16—El concesionario garantizará el fiel cumplimiento del contrato con un depósito de \$ oro 100.000 (cien mil pesos oro sellado), á la orden del Poder Ejecutivo.

Art. 17—Además de lo establecido en el artículo 8º, correrá por cuenta del concesionario el alumbrado de los diques.

Art. 18—Los diques, depósitos, carboneras, etc., y demás instalaciones, estarán sujetas á todas las disposiciones aduaneras, y regirán en ellos los reglamentos y disposiciones generales dictadas para la aduana y puerto de la Capital; de modo que estas obras deben considerarse como parte integrante del puerto, al efecto de la reglamentación, movimiento, etc.

Art. 19—El concesionario podrá transferir esta concesión, previa la venia del Poder Ejecutivo.

Art. 20—Las cuestiones que puedan suscitarse entre el concesionario y el Poder Ejecutivo serán resueltas por árbitros nombrados uno por cada parte, siendo el tercero en discordia el presidente de la Suprema Corte.

Art. 21—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

E. BERDUC.

—A la Comisión del Interior.

Buenos Aires, julio 25 de 1900.

Al honorable Congreso:

La peste bubónica ha hecho nuevamente su aparición en la capital de la República del Paraguay, lo que exige la adopción de medidas inmediatas que nos pongan al abrigo de una nueva invasión de esta enfermedad.

La experiencia adquirida durante la última epidemia y el material sanitario recientemente comprado, hacen que esta vez los gastos sean mucho menos crecidos que antes, por cuya razón el Poder Ejecutivo solicita de vuestra honorabilidad la sanción del adjunto proyecto de ley, á fin de poder hacer frente á las exigencias de la situación.

Dios guarde á vuestra honorabilidad.

JULIO A. ROCA.
FELIPE YOFRE.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Ábrese un crédito suplementario al Departamento del Interior por la cantidad de cincuenta mil (50.000) pesos moneda nacional, para hacer frente á los gastos que demande la defensa sanitaria del país contra la introducción de la peste bubónica, cuya reaparición en la Asunción del Paraguay ha sido declarada oficialmente.

Art. 2º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FELIPE YOFRE.

—A la Comisión de Hacienda.

Buenos Aires, julio 28 de 1900

Al honorable Congreso de la Nación:

Cuando el señor senador par la Capital, doctor Miguel Cané, presentó á esa honorable Cámara, de que forma parte, el importante proyecto de ley reglamentando el derecho y los procedimientos para la expulsión de los extranjeros cuya permanencia en el territorio del país se considerase peligrosa, los ministros del Interior, Relaciones Exteriores y de Justicia fueron invitados por la Comisión de Negocios Constitucionales del Senado, que estudia el proyecto, á cambiar ideas á su respecto.

Después de varias conferencias se convino en que el primero de los ministros nombrados diese forma definitiva al pensamiento del gobierno, proyectando á su vez una ley que comprendiese todos los puntos que eran motivo de debates en la Comisión.

Cumpliendo aquella promesa, el Poder Ejecutivo tiene el honor de presentaros el proyecto adjunto, el que es más amplio en sus propósitos y tiene objetos más permanentes. No es una simple ley de defensa social contra un peligro posible, sino que es la reglamentación del derecho que tienen los extranjeros de todos los países del mundo para entrar, permanecer y salir en y del territorio argentino, conforme á las leyes que reglamenten su ejercicio.

El Ministro del Interior, al preparar el proyecto adjunto, ha estudiado los principios que rigen la materia, armonizándolos con los intereses de la República, creyendo haber conseguido reunir en él las disposiciones necesarias para asegurar á todos los extranjeros habitantes en el país su permanencia en el territorio nacional, en tanto que respeten sus leyes; y armando á los poderes públicos de las facultades indispensables para defender el orden social y las instituciones.

Explicado así el origen y los propósitos del adjunto proyecto, el Poder Ejecutivo no cree necesario fundar en detalle cada una de sus cláusulas, explicadas en sus alcances y en sus objetos por su propio texto y por la exposición de motivos que se encontrarán en la Memoria de ese Ministerio, que será en breve repartida.

Vuestra honorabilidad, al tomarlo en consideración, debe recordar que una ley semejante á la que se proyecta es urgentemente reclamada, tanto más, cuanto que el desarrollo creciente del país atrae á nuestras playas, en la forma de inmigración, elementos peligrosos y mal sanos; que nuestras disposiciones vigen-

tes no son bastante explícitas para armar al poder público, de dos medios de defensa necesarios.

Dios guar le á vuestra honorabilidad.

ROCA.

FELIPE YOFRE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPÍTULO I

DE LA ADMISIÓN DE EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA

Artículo 1º—El derecho de entrar y permanecer en el país, que la Constitución acuerda al extranjero, es correlativo de los deberes que las leyes les impone, de manera que ningún extranjero podrá alegar derecho para permanecer en la República, fundado en el hecho de que su acceso al territorio le había sido permitido.

Art. 2º—El Poder Ejecutivo podrá prohibir la entrada en el país de cualquier extranjero que se encuentre en las circunstancias siguientes:

- a) Ser un prófugo de cárcel ó un perseguido por autoridad extranjera, acusado de haber cometido alguno de los delitos que dan lugar á la extradición, con arreglo á los tratados internacionales ó á los principios del derecho de gentes.
- b) Haber tomado parte en asonadas ó acontecimientos anarquistas, en su propio país ó en cualquier otro.
- c) Estar afiliado á alguna de las sociedades secretas conocidas universalmente con el nombre de «anarquistas».
- d) Haber sido condenado por delito común contra las personas ó la propiedad y encontrarse aún sometido á la vigilancia policial después de cumplida su pena aflictiva.

Art. 3º—Las averiguaciones y defensa á que den lugar los casos previstos en el artículo anterior, se harán breve y sumariamente ante la autoridad administrativa que el Poder Ejecutivo designe, en el punto de arribo del extranjero, pudiéndose impedir su entrada en el territorio hasta tanto se resuelva por el Presidente de la República lo que estime conveniente sobre su admisión. Si el buque que condujese al extranjero peligroso debiera emprender viaje para el exterior antes de que aquella resolución se hubiese adoptado, el extranjero, objeto de la investigación, podrá optar entre permanecer detenido administrativamente, hasta tanto su caso se resuelva, ó salir en el mismo buque que lo trajo.

Art. 4º—Los extranjeros que al entrar en el territorio de la República por las fronteras mediterráneas sean objeto de alguna investigación á su respecto, podrán ser detenidos administrativamente hasta tanto se resuelva sobre su admisión ó rechazo.

Art. 5º—El Presidente de la República podrá permitir la entrada en el territorio del país de cualquier extranjero comprendido en las limitaciones que determina la presente ley, y queda facultado en esos casos el punto forzoso de su residencia, con la obligación de no abandonarlo sin noticia ni anuencia del

Art. 6º—Los extranjeros cuya entrada en el territorio de la República no fuese permitida en acuerdo de esta ley, deberán ser reembarcados en el mismo buque que los condujo, ó en otro de la empresa á que éste perteneciese, y por cuenta de ella si él no prefiriese salir en otro buque.

Art. 7º—Si el Poder Ejecutivo no resolviese sobre la admisión ó el rechazo de un extranjero dentro de los cinco días siguientes á su arribo al país, que por sí, ó cualquier otra persona por él, podrá ocurrir al juez federal respectivo, pidiendo que su caso sea resuelto por él en los términos señalados por el Código de Procedimientos en materia criminal, para el recurso de *habeas corpus*. El juez federal resolverá, en mérito de los antecedentes que reciba, si el extranjero se encuentra ó no comprendido en los casos fijados por el artículo 2º y declarará su admisión ó rechazo del país.

CAPÍTULO II

DE LA RESIDENCIA DE LOS EXTRANJEROS

Art. 8º—El derecho de los extranjeros para residir en el territorio de la República estará sujeto á las prescripciones de la presente ley, sin perjuicio de los derechos civiles que les correspondan.

Art. 9º—Tendrán residencia política para los efectos de esta ley, los extranjeros que se encuentren en las condiciones siguientes:

- 1º—Que hubiese residido en la República durante más de dos años, ocupados en algún trabajo comercial, industrial, científico, profesional ó artístico.
- 2º—Que hubiesen sido durante el mismo tiempo, sin soluciones de continuidad, por ausencias temporales, jornaleros, peones de labranza ó personas ocupadas en el servicio doméstico.
- 3º—Que se hubiese casado con mujer argentina, y hubiese tenido al menos un hijo nacido en el país.
- 4º—Que se hubiese casado con mujer argentina, aunque no tuviesen hijos, teniendo residencia inmediata mayor de un año.
- 5º—Que tuviesen bienes raíces propios en la República Argentina, ó casa comercial, ó establecimiento industrial ó agrícola que represente un capital mínimo de \$ 25.000 m/n.
- 6º—Que hubiese prestado servicio militar á la Nación.
- 7º—Que hubiese solicitado, con derecho, carta de ciudadanía argentina, aun cuando no la hubiesen obtenido por demora en la tramitación.

CAPÍTULO III

DE LA REMOCIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS EXTRANJEROS

Art. 10—Los extranjeros que hubiesen sido condenados por algún delito que haya merecido pena de presidio ó penitenciaria, ó como reincidentes por cualquier delito contra la propiedad, podrán ser expulsados del territorio de la República, una vez que hayan cumplido su condena. A los efectos de este artículo, los gobiernos de provincia comunicarán al Ministro del Interior la nómina de los extranjeros que se encuentren en las condiciones indicadas, debiendo acompañar los antecedentes del caso ó informar sobre la

persona del extranjero, haciéndolo en tiempo oportuno para que el Presidente pueda resolver lo conveniente antes de que la pena se haya extinguido.

Art. 11—Los extranjeros que, después de haber entrado en el territorio de la República, se hiciesen peligrosos por sus actos ó propaganda para la tranquilidad ó el orden público de la Nación, ó conspirasen contra algún gobierno extranjero desde el territorio argentino, y los que se hallasen ó incurriesen en alguno de los casos enumerados en el artículo 2º de la presente ley, podrán ser obligados á alejarse de un lugar determinado de la República, ó á residir en otro, ó á salir del territorio nacional, por el término que se señale por decreto del Poder Ejecutivo.

Art. 12—La facultad de remover, dentro del territorio, ó de expulsar de él á los extranjeros, pertenece al Presidente de la República, quien podrá hacer uso de ella sin dar los motivos y fundamentos de la medida, sin más limitaciones que las siguientes:

1º Cuando se trate de los extranjeros no comprendidos en el artículo 10, podrá removerlos de un punto á otro de la República, pero no expulsarlos, á no ser que, en el lugar á donde hubiesen sido removidos, continuasen haciéndose peligrosos para la seguridad y el orden públicos.

2º Cuando la persona de quien se trate hubiese sido reclamada por algún gobierno extranjero, y su extradición fuese negada por los tribunales. En ese caso el Poder Ejecutivo podrá remover al extranjero de un punto á otro de la República, pero no expulsarlo.

Art. 13—En todos los casos en que se decreta la remoción de un extranjero, éste tendrá derecho á salir del país por su cuenta, sin que pueda regresar á él sin permiso del Poder Ejecutivo.

Art. 14—No será procedente ante los tribunales la acción de amparo de la libertad, cuando se trate de decretos del Poder Ejecutivo removiendo ó expulsando extranjeros.

Art. 15—Los jueces de sección no despacharán cartas de ciudadanía argentina solicitadas por extranjero, sujetos á un decreto de remoción ó expulsión.

Art. 16—Los gobernadores de las provincias y de los territorios nacionales podrán solicitar del Presidente de la República la expulsión ó remoción de los extranjeros que por su conducta se hagan peligrosos para la seguridad ó el orden públicos de sus respectivos territorios, ó que se hallen en las condiciones de los artículos 2º y 11 de la presente ley.

Art. 17—El extranjero contra quien se haya dictado un decreto de remoción, de un punto á otro de la República, deberá efectuarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes; y aquel contra quien se decretase la expulsión, deberá abandonar el territorio nacional dentro de los tres días posteriores á la orden de salida. Sin embargo, en uno y otro caso, el Poder Ejecutivo podrá, como medida preventiva, ordenar la vigilancia policial ó la detención del extranjero objeto de aquellas medidas, hasta que llegue el momento en que deban cumplirlas.

Art. 18—Todo extranjero removi lo ó expulsado que, violando la prohibición que le hubiese sido impuesta, regresase al territorio de donde fué removido, ó al país, será aprehendido y sometido al juez federal respectivo, quien comprobará, en juicio sumario, los hechos, y siendo ciertos aplicará á los infractores la pena de tres ó seis meses de arresto. Cumplida aquélla, el infractor será removido ó expulsa-

do por la fuerza pública. Si reincidiese, la pena será de tres á seis años de prisión.

Art. 19—El Presidente de la República podrá, en cualquier momento y sin motivar la medida, dejar sin efecto las órdenes de expulsión dictadas contra cualquier extranjero.

Art. 20—No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los derechos y garantías reconocidos á los extranjeros por los tratados internacionales, ni los casos de extradición que corresponden á la jurisdicción de los tribunales federales.

Art. 21—Esta ley no es aplicable personalmente á las mujeres, pero los extranjeros expulsados podrán exigir que sus esposas é hijos menores les acompañen á salir del territorio argentino, sin perjuicio de los derechos de los cónyuges regidos por la ley de matrimonio y el Código Civil de la República.

Art. 22—Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc.

FEELIPE YOFRE.

—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

PETICIONES PARTICULARES

Varios abogados de esta Capital se adhieren al proyecto del señor senador Cané, sobre institución de un colegio de abogados.

—A sus antecedentes.

DESPACHOS DE COMISIONES

La de Legislación se ha expedido en varias solicitudes pidiendo venia para demandar al Poder Ejecutivo. La del Interior en el proyecto, en revisión, sobre seguros sobre la vida.

—A la orden del día.

II

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha tomado en consideración el proyecto de ley, venido en revisión, acordado al ciudadano don Narciso M. Acuña permiso para aceptar el cargo de cónsul del Perú en el Paraguay; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra sanción.

Sala de la Comisión, julio 23 de 1900.

J. Figueroa Alcorta.—Domingo

T. Pérez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Concédesse al ciudadano Narciso M. Acuña el permiso que solicita para aceptar el cargo de cónsul del Perú en el Paraguay.